

C.A. de Concepción.

Concepción, dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Compareció en este proceso **Rol 20.902-2023** del Libro Protección de esta Corte de Apelaciones, el abogado Javier Bustos Díaz, en nombre del **Club Deportivo “Héctor Dávila” de Yumbel**, e interpuso recurso de protección en contra de la **Asociación de Fútbol Amateur Comunal Liga Campesina de Yumbel**, por haber incurrido ésta en una conducta ilegal y arbitraria, según el actor, ya que el domingo 12 de noviembre de 2023, en circunstancias que el club recurrente se encontraba jugando uno de los partidos de la serie de honor con el equipo de fútbol singularizado como “Sucupira”, al finalizar el encuentro, ocurrieron hechos de violencia provocados por la barra de este último equipo, los que describe latamente en su recurso.

Agrega que según lo anterior, jugadores y barristas del equipo de fútbol “Sucupira”, comenzaron una riña o pelea al interior de la cancha donde se estaba llevando a cabo el encuentro deportivo, la cual involucró por parte de “Sucupira”, armas blancas y otros objetos corto punzantes, de lo cual quedó registro en un video.

Añade que el 15 de noviembre de 2023, el Comité de Disciplina, perteneciente e integrante de la entidad recurrida, comunicó a través de carta, la aplicación de una sanción a su representada en sus distintas series, esto es, serie primera, serie segunda, serie femenina y serie *senior*, la cual consistió en la suspensión inmediata de la participación de la recurrente, en la “Liga Campesina 2023”.

Explica que dicha sanción fue apelada por su representada, pero sin que se contara con mayores antecedentes en ese



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LFYNXLNLECG

momento; sin embargo, la recurrida decidió ratificar la decisión de suspensión de la recurrente, lo cual fue comunicado el 30 de noviembre de 2023 mediante carta.

Expresa que resulta necesario que la dinámica de los hechos recién descritos, sea debidamente aclarada e investigada, primeramente por parte de la recurrida. Dice que el Comité de Disciplina de la institución recurrida debe instruir una investigación real, efectiva, con un marco de transparencia y/o publicidad y bilateralidad que permita crearse un concreto convencimiento y conocimiento previo de lo que ocurrió, lo que en la práctica no sucedió.

Precisa que la intención de su representada es que se apliquen los castigos, pero de manera justa y a través del desarrollo de un debido proceso, racional y justo, con las características que éste debe tener, exento de motivaciones antojadizas y falta de transparencia, con la posibilidad de presentar mayores antecedentes o pruebas, o de contradecir la ya aportada.

Indica que ni en las bases del campeonato, vigentes desde el año 2019, ni en el anexo de bases del mismo, que rige a partir del mes de abril de 2022, se contempla un procedimiento de investigación de hechos susceptibles de sanción y la posibilidad de formular descargos, lo que en el texto de las bases se denomina apelación, ni siquiera tiene establecido un procedimiento claro, todo es desprovisto de formalidades concordantes con un debido proceso.

Arguye que es claro que la decisión adoptada en contra de la parte recurrente es arbitraria e ilegal, ha sido adoptada sin sujeción a un proceso investigativo y sancionatorio y produce, como consecuencia de ello, la injusta privación del club deportivo recurrente de su legítimo derecho a participar de la competencia



de fútbol en igualdad de condiciones.

Dice que el marco normativo de la sanción impuesta, está dado por el texto de las bases del campeonato y su anexo, siendo la norma aplicable, según se informó de manera verbal a los representantes de la recurrente en el acápite 6.8 de las bases, que establece que si en un partido existiesen peleas y se utilizare armas y objetos contundentes, el club quedará automáticamente expulsado del campeonato. Sin embargo, ello no libera a la recurrida de la aplicabilidad de las normas constitucionales de **debido proceso**, a la que debe someterse cualquier procedimiento, más aún si aplica una sanción de las consecuencias del caso de autos.

Concluye solicitando que se acoja este recurso, declarando que la recurrida ha incurrido en violación flagrante a los derechos constitucionales de la institución recurrente, vulnerando la garantía constitucional del artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, debiendo dejar sin efecto la sanción de expulsión del Club Deportivo Héctor Dávila, por no ser una derivada de un proceso reglamentario y, asimismo, ordenar que se realice una investigación objetiva de los hechos acontecidos, en la cual se vele por la correcta y constitucional sustanciación de la misma.

**Informó** Francisco Daniel Ríos Quilodrán, abogado, en representación de la Asociación de Fútbol Amateur Comunal Liga Campesina de Yumbel, solicitando el rechazo de este recurso, por las razones de hecho y de derecho que detalla en su informe.

Expresa, en síntesis, que en anterior oportunidad se suspendió la participación del equipo agresor en el torneo del año 2022, para proteger así al equipo “Héctor Dávila”, pues fue a su gente a quien el equipo suspendido en aquel entonces agredió. Agrega que desde la fecha en que se recibió el fallo del recurso



de protección Rol 60.370-2022 de esta Corte, se trabajó para modernizar y dotar de estándares básicos de debido proceso al reglamento, lo cual se efectuó en sucesivas reuniones en las cuales fue participe el equipo recurrente de autos, a través de sus representantes, estando éstos totalmente a favor de cada norma que se redactó con el fin de erradicar y prevenir la violencia en el torneo, y dar así seguridad a los asistentes a los eventos deportivos que patrocina su liga. Por lo tanto, dicho cuerpo normativo, que nace de la autonomía de la voluntad de los clubes de la liga, a principio de cada año se preocupa de eliminar la violencia en las canchas, para lo cual traza procedimientos sancionatorios estándar, acorde a lo que se entiende como debido proceso, cuestión que al tenor del recurso sería desconocido u olvidado por la parte recurrente. Añade que cada club participante del torneo de la Liga Campesina de Yumbel tiene acceso y copia a las normas y reglas que los rigen; por lo que quien plantea la inexistencia de algo en lo que participó activamente, o no ha estudiado el régimen normativo a cabalidad, o derechamente desconoce de mala fe sus propios actos.

Agrega que conforme a las directrices trazadas por las garantías del debido proceso, se logró luego de varias sesiones un cuerpo normativo que da satisfacción al debido proceso y busca en lo medular erradicar la violencia de las canchas de fútbol.

Así las cosas, dice que hay dos normas fundamentales, la primera es el Reglamento Interno de la Agrupación Comunal Deportiva Campesina Amateur de Yumbel: Directriz General Basica de la Liga Deportiva. Luego están las Bases Campeonato para cada año, aclarando que estas normas prevalecen sobre la norma anterior. Enseguida está la obligación de escrituración de



las sentencias. Al respecto precisa que los clubes acordaron dejar atrás la oralidad en la comunicación de las resoluciones sancionatorias, para evitar así transgredir de algún modo el derecho de los sancionados a conocer los fundamentos del proceso, normas reglamentarias aplicadas, órgano que resolvió, etc.

Asimismo, está el sistema de apelación. Precisa que en el antiguo sistema procedimental, antes del fallo dictado por esta Corte en el recurso de protección rol 60.370-2022, se establecía que los fallos emitidos por el tribunal de disciplina eran inapelables, cuestión que se acordó subsanar por medio de las sesiones de redacción de los nuevos reglamentos. Dice que es por ello que hoy en día existe un sistema de apelación, por lo que el derecho a la doble instancia está totalmente protegido, derecho que incluso ejerció la recurrente y, además, muchas veces fue parte de ello a través de su presidente del órgano de doble instancia.

Asimismo, se estableció un sistema gradual y de apercibimiento. En efecto, para evitar resoluciones de plano, se estableció un avance gradual del tipo de sanciones; así, la misma recurrida fue apercibida durante el año, por lo que no fue un acto antojadizo, sino que tenía advertencias previas en el sentido que si no erradicaba su conducta violenta, sería suspendida su participación en los torneos deportivos; por lo tanto, la suspensión de la actora se da en un contexto de racionalidad y consecuencias propias de sus actos.

Del mismo modo, se estableció la existencia de un juez imparcial. En efecto, el actual sistema de justicia en la liga recurrida contempla la obligación de abstenerse de conocer de los asuntos a aquellos integrantes del Comité de Disciplina que



pertenezcan a clubes involucrados.

Otra reforma fue la ampliación de los integrantes del Comité de Disciplina; por lo cual se amplió de 3 a 5 personas en cuanto a los integrantes del tribunal de disciplina de la Liga, con ello se busca dotar a un debate más rico en opiniones y conocimiento a cada caso en concreto.

A mayor abundamiento, con fecha 23 de marzo último, según acta de reunión que se acompaña al informe, la recurrente recibió copia íntegra de las Bases Reglamentarias del actual torneo, aceptando su contenido sin ningún reparo, no por desconocimiento, sino precisamente porque los representantes de dicho club habían participado en su creación, aportando su opinión, sus observaciones. Precisa que todo club tiene derecho a voz y todos los clubes son respetados, además existe el derecho a allegar correspondencia escrita a la directiva en cada reunión, la cual obtiene respuesta inmediata del Consejo Pleno, inclusive la misma actora acompañó copias de dichas actuaciones, por lo tanto es improcedente sostener que no han sido oídos, o que arbitrariamente se les ha privado de alguna actuación que el reglamento les franquea.

Asimismo, señala que la parte recurrente adjunta documentación y admite haber ejercido derechos como a ser oídos, a presentar prueba, a no ser sometido a otras normas, sino aquellas que tengan origen anterior a la ocurrencia de los hechos; de hecho, ellos mismos acompañan documentos en tal sentido, lo que permite afirmar que hay un reglamento, existe la posibilidad de allegar prueba, hay árbitros e informes escritos, hay sentencia fundada por escrito, pública y entregada al sancionado; hay doble instancia, respetando los principios del debido proceso, resultando fácil su identificación en las diferentes etapas procedimentales



descritas en el informe del recurso, al cual fue sometido no solo el equipo de futbol “Héctor Dávila” sino a la generalidad de infractores.

Arguye que para concluir o arribar a dicha sanción, la Liga Campesina de Futbol utilizó una institución imparcial, denominada “Consejo o Tribunal de Disciplina”. En efecto, no pueden, los integrantes del Consejo de Disciplina, ser del mismo equipo de origen entre sí, sus integrantes deben tener intachable conducta, ser aprobado su nombramiento al inicio del torneo por el Consejo de Presidentes de los clubes participantes del torneo, sus resoluciones deben ser aprobadas u objetadas por el mismo Consejo en reuniones públicas, con derecho de cada Presidente de club a dar su opinión o fundamento para concluir su decisión. Así las cosas, el equipo recurrente, “Héctor Dávila”, siempre participó de dicho proceso racional y justo, pudiendo hacer uso de la palabra, recibiendo sus cartas y haciéndolas públicas a todo el Consejo.

Argumenta que el Consejo de Disciplina entrega en forma escrita copia de la resolución de sanción para el debido análisis y ejercicio del derecho a apelar, luego lee “a viva voz” la aplicación de las sanciones, para que sean aprobadas u objetadas por el Consejo de Presidentes; cada presidente o delegado tiene derecho a voz y voto, salvo aquellos de los clubes involucrados, por lo cual se delibera si procede o no la correcta aplicación de las bases y el reglamento que esos mismos presidentes aprueban una vez comenzado el torneo. Dice que en la especie se verificó de tal forma, incluso se leyó la carta del club recurrente para con todos los antecedentes aprobar o no la sanción.

Se trajeron los autos en relación.

**Con lo relacionado y considerando:**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LFYNXLNLECG

**1º)** Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de esta acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, -o arbitrario-, o sea, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes –protegidas-, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

**2º)** Que la presente acción constitucional se funda en supuestos actos de naturaleza arbitraria e ilegal cometidos en el procedimiento sancionatorio incoado por la Liga Deportiva Amateur, específicamente por su Tribunal de Disciplina, en contra del club deportivo recurrente. Este último fundamenta su recurso en la eventual transgresión de la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 número 3 de la Carta Fundamental, en relación al debido proceso legal, alegando concretamente la supuesta inobservancia de un proceso racional y justo, por las razones que expresa en su recurso, y que fueron sintetizadas en la parte expositiva de este fallo;

**3º)** Que del mérito de los antecedentes del proceso y de lo informado por los recurridos, aparece que al concluir un partido de fútbol jugado por el club recurrente, se produjo una riña o pelea



entre barristas al interior de la cancha donde se estaba llevando a cabo el evento deportivo, la cual habría involucrado por parte del equipo contrario al del recurrente, armas blancas y otros objetos corto punzantes.

El 15 de noviembre de 2023, el Comité de Disciplina perteneciente e integrante de la recurrida, comunicó a través de carta, la aplicación de una sanción al club recurrente, en sus distintas series, la cual consistió en la suspensión inmediata de la participación de éste en la "*Liga Campesina 2023*".

La sanción recién mencionada fue apelada, pero la recurrida decidió ratificar la decisión de suspensión de la recurrente, lo cual fue comunicado el 30 de noviembre de 2023 mediante carta;

**4°)** Que primero que todo, debe decirse que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile, la garantía del debido proceso no se encuentra amparada por el recurso de protección, pues la que sí está es el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, que no es lo detallado en la presente acción de protección, pues no ha alegado que la entidad que impuso la sanción recurrida no era la procedente en derecho para imponerla;

**5°)** Que sin perjuicio de lo concluido precedentemente, revisados los antecedentes incorporados por las partes, puede advertirse que en la especie hay dos normas fundamentales, la primera es el "Reglamento Interno de la Agrupación Comunal Deportiva Campesina Amateur de Yumbel: Directriz General Basica de la Liga Deportiva.". Luego están las "Bases de Campeonato" para cada año, normas estas últimas que prevalecen sobre la normativa anterior. Luego se encuentra establecida la escrituración de la sentencia, por lo cual los sentenciados pueden conocer los fundamentos del proceso, las



normas reglamentarias aplicadas, el órgano que resolvió, etc.

Asimismo, se encuentra establecido el recurso de apelación, por lo que el derecho a la doble instancia está expresamente consagrado, derecho que fue ejercido por el club recurrente, según lo reconoce expresamente en su recurso. Es más, según se dice en el informe, en otros procesos disciplinarios la recurrente fue parte a través de su presidente del referido órgano de doble instancia.

Por otra parte, se estableció un sistema gradual de sanciones y de apercibimientos previos, para evitar así resoluciones de plano y, asimismo, un avance gradual de las sanciones, pudiendo apreciarse de los antecedentes que la parte reclamante fue apercibida durante el año, por lo que no fue un acto antojadizo, sino que tenía advertencias previas de que si no erradicaba su conducta violenta, sería suspendida su participación en los torneos deportivos.

En consecuencia, la suspensión del recurrente se dio en un contexto de racionalidad y consecuencias propias de sus actos.

Por otra parte, se encuentra establecida la existencia de un juez imparcial, obligándose a abstenerse de conocer de los asuntos a aquellos integrantes del Comité de Disciplina que pertenezcan a clubes involucrados. Asimismo, conforme se indicó en el informe y en la documentación acompañada, se amplió el número de integrantes del Comité de Disciplina, de 3 a 5 personas, lo cual permite un debate más amplio en opiniones y conocimiento a cada caso en concreto;

**6°)** Que, a mayor abundamiento, el 23 de marzo último, según acta de reunión que se acompaña al informe de la recurrida, el club recurrente recibió copia íntegra de las Bases Reglamentarias del actual torneo, aceptando su contenido sin



ningún reparo, esto último derivado del hecho que los representantes de dicho club participaron en la elaboración de las mismas, aportando su opinión y sus observaciones.

Asimismo, todo club tiene derecho a voz, por lo tanto es improcedente sostener que no han sido oídos, o que arbitrariamente se les ha privado de alguna actuación que el reglamento les franquea; de hecho, ellos mismos acompañan documentos en sentido tal que permite afirmar que hay un reglamento, hay posibilidad de allegar prueba, existen peticiones resueltas, hay informes escritos de árbitros; la sentencia se encuentra debidamente fundada, por escrito, es pública, se le entregó al club sancionado y, como ya se dijo, hay doble instancia, habiendo apelado la parte recurrente de la sanción impuesta, recurso que, en todo caso, fue rechazado, confirmándose la sanción impugnada.

**7º)** Que, asimismo, la Liga Campesina de Fútbol Amateur, utiliza una institución imparcial, denominada “Consejo o Tribunal de Disciplina”, no pudiendo los integrantes de dicho Consejo ser del mismo equipo investigado;

**8º)** Que, en consecuencia, el equipo recurrente siempre participó de dicho proceso racional y justo, pudiendo hacer uso de la palabra, recibiendo sus cartas y haciéndolas públicas a todo el Consejo.

Asimismo, el Consejo de Disciplina entrega en forma escrita copia de la resolución de sanción para el debido análisis y ejercicio del derecho a apelar, luego lee “a viva voz” la aplicación de las sanciones para que sean aprobadas u objetadas por el Consejo de Presidentes, lo que ocurrió en la especie, incluso se leyó la carta del club recurrente para, con todos los antecedentes, aprobar o no la sanción.



9º) Que atendido todo lo expuesto precedentemente, la presente acción constitucional no puede prosperar, pues la conducta de la parte recurrida no fue ilegal ni arbitraria, resultando innecesario entonces entrar al análisis de la garantía constitucional que se indica como conculcada, esto es, el debido proceso, sin perjuicio que, como ya se dijo, ésta no se encuentra expresamente amparada por esta acción constitucional;

10º) Que no se impone condena costas a la parte recurrente, por estimarse que se ha tenido motivo plausible para accionar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, **se rechaza**, sin costas, la acción de protección interpuesta por el **Club Deportivo “Héctor Dávila” de Yumbel** en contra de la **Asociación de Fútbol Amateur Comunal Liga Campesina de Yumbel**.

Regístrese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

**Rol N° 20.902-2023. Protección.-**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LFYNXLNLECG

Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Claudio Gutierrez G. y los Ministros (as) Suplentes Margarita Elena Sanhueza N., Claudia Andrea Vilches T. Concepcion, dieciseis de enero de dos mil veinticuatro.

En Concepcion, a dieciseis de enero de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LFYNXLNLECG